

TENDENCIA ECONÓMICA

Informe Mensual de FEDESARROLLO

128

Febrero 2013



Editorial: Crisis en la salud: preguntas y reflexiones preliminares de cara a una reforma en gestación

Actualidad: La subasta de 4G y la competencia en el mercado de telecomunicaciones móviles en Colombia

Indicadores Económicos

EDITORES TENDENCIA ECONÓMICA

Leonardo Villar
Juan Mauricio Ramírez

DIRECTOR EJECUTIVO

Leonardo Villar

SUBDIRECTOR

Juan Mauricio Ramírez

DIRECTOR DE ESTUDIOS MACROECONÓMICOS Y SECTORIALES

Jonathan Malagón

INVESTIGADORES ASISTENTES

Juan Sebastian Betancur
Wilber Jimenez
María Alejandra Peláez
Carlos Ruíz
Daniela Sánchez
Julio César Vaca

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Consuelo Lozano | Formas Finales Ltda | formas.finales@gmail.com

IMPRESIÓN

La Imprenta Editores S.A.
Calle 77 No. 27A-39
laimprenta@etb.net.co
Bogotá, D.C.

Impresa y hecha en Colombia
Printed and made in Colombia

FEDESARROLLO

Calle 78 No. 9-91 | Tel.: 325 97 77 | Fax: 325 97 70 | A.A.: 75074
<http://www.fedesarrollo.org.co> | Bogotá, D.C., Colombia

Crisis en la salud: preguntas y reflexiones preliminares de cara a una reforma en gestación

La salud ha sido uno de los grandes temas del debate político y académico en Colombia durante las últimas décadas. La reforma emprendida hace veinte años (Ley 100) indujo un enorme y positivo cambio a través de la creación del nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), llevando la cobertura del aseguramiento de niveles inferiores al 33% de la población en 1993 a más del 95% en la actualidad.

No obstante, en el último lustro el sistema de salud colombiano ha entrado en una crisis operativa y gerencial, que se manifiesta en que muchos de los agentes involucrados en el sistema, -EPS, clínicas, hospitales y otras IPS, personal médico y proveedores- enfrentan graves problemas de liquidez, que en muchos casos empiezan a reflejarse en una deficiente atención a los usuarios, corrupción e ineficiencia en el uso de los recursos y una enorme presión jurídica y fiscal sobre el sistema.

En este contexto, el gobierno ha empezado a socializar los puntos centrales de lo que sería una eventual reforma a la salud, al tiempo que ha insistido en que será la apuesta legislativa más importante de 2013. El presente Editorial hace un diagnóstico de los principales componentes de la crisis de la salud, al tiempo que presenta algunas reflexiones y cuestionamientos preliminares en relación con los puntos que el gobierno ha dejado entrever respecto al nuevo diseño del sistema.

La crisis en el sistema de salud colombiano: principales problemas

Son muchos los elementos que conforman el complejo panorama del sistema de salud colombiano. Los principales factores se pueden agrupar de acuerdo con su naturaleza: los que se relacionan con la sostenibilidad financiera del sistema, los vinculados con el diseño y operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), y aquellos que tienen que ver con la regulación, vigilancia y control.



Sostenibilidad financiera

La sostenibilidad financiera del sistema se ve amenazada por tres vías: (i) la jurídica, (ii) la del desbalance en las fuentes de recursos, entre el régimen contributivo y el subsidiado, por cuenta de la informalidad laboral y (iii) la falta de un sistema adecuado de prevención en salud.

- i. La ausencia de una ley estatutaria que ofrezca claridad sobre el derecho a la salud y los límites de lo que debe cubrir el SGSSS ha permitido que los jueces, en sus sentencias, presionen significativamente el gasto público en salud. La concepción inicial del sistema contemplaba que la definición sobre los límites mencionados sería hecha mediante la delimitación del Plan Obligatorio de Salud (POS), el cual sin embargo no fue actualizado durante cerca de veinte años induciendo por ello la solución judicial a través de tutelas y más recientemente de decisiones de los Comités Técnico Científicos (CTC) creados para administrar los gastos no incluidos en el POS. En efecto, entre 2003 y 2010 el gasto No POS pasó de 0,9 al 18,5% del total de los gastos de la subcuenta de compensación y para 2012 uno de cada siete pesos del régimen contributivo se gastó a través de los recobros de tutelas y CTC. Por el lado del régimen subsidiado, además, el mandato de universalización y homologación con el contributivo que hizo la Corte Constitucional en 2008 impusiera mayores gastos a los operadores del régimen subsidiado sin una contrapartida clara por el lado de los ingresos.
- ii. Cuando se aprobó la Ley 100 de 1993, los congresistas estimaban que el crecimiento del producto sería suficiente para incentivar la formalización de la economía. De esta manera se crearían empleos estables, condiciones para aumentar el número de afiliados al régimen contributivo y reducir proporcionalmente los integrantes del régimen subsidiado. Sin embargo, la

informalidad laboral no ha respondido a las variaciones del producto. Por el contrario, se incrementó de cerca del 35% promedio durante los primeros años de la reforma a más del 50% para enero de 2013, en parte como consecuencia de los altos sobrecostos a la nómina que generó la propia Ley 100 y que sólo ahora, con la reforma tributaria aprobada a finales de 2012, han empezado a moderarse. Lo anterior genera un insano desbalance entre fuentes y usos, con un crecimiento desproporcionado del régimen subsidiado.

- iii. La no implementación de programas de promoción y prevención han llevado al sistema de salud a asumir altos costos en pacientes con enfermedades que se habían podido prevenir o detectar a tiempo, asumiendo un mayor gasto por rehabilitación.

Diseño de las EPS

El marco institucional en el cual se han desempeñado las EPS, especialmente en el régimen subsidiado, ha permitido que se desarrollen deficiencias y problemas de riesgo moral en detrimento del sistema de salud. Los principales problemas se asocian con (i) la inoportuna irrigación de los recursos hacia los hospitales y demás Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), (ii) los abusos derivados de los esquemas de integración vertical y (iii) la insuficiente prestación del servicio en zonas apartadas y para población vulnerable.

- i. Los problemas de irrigación de los recursos hacia los hospitales y demás IPS se han exacerbado en el periodo reciente por los altos niveles de iliquidez asociados a las demoras en los pagos por parte del Fosyga a las propias EPS, consecuencia a su vez del necesario proceso de revisión de los enormes recobros por gastos no contemplados en el POS que se forzaron por la vía de tutelas o autorizaciones de los CTC.

- ii. Las EPS han podido integrar verticalmente su estructura de servicios, al permitírseles invertir con ciertos límites en empresas proveedoras de sus insumos y en IPS. Este hecho no es en sí mismo perjudicial y puede contribuir por el contrario a mejorar la eficiencia del sistema, siempre y cuando se obligue, como sucede en teoría en el caso colombiano, a que una parte importante de los servicios sean contratados externamente. No obstante, la falta de una buena regulación y supervisión de las relaciones entre las EPS y las IPS generaron problemas de cartelización y sobrecostos, conllevando además un deterioro en la calidad del servicio para los pacientes y una situación de desventaja para los hospitales y clínicas no pertenecientes a las organizaciones integradas verticalmente.
- iii. Pese a los grandes avances en cobertura logrados mediante la Ley 100 de 1993, el acceso a los servicios de las EPS han sido complejos tanto para las minorías étnicas como para los habitantes de zonas marginadas del país. Incluso para miembros del régimen subsidiado en zonas de plena cobertura han existido barreras al acceso de los servicios de las EPS, en parte como consecuencia de que, pese a haberse igualado el POS del régimen contributivo con el subsidiado, las EPS no recibieron igualación en los recursos por cada afiliado como Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Regulación del sistema

Además de la complejidad en la evaluación de los servicios tan heterogéneos que ofrece el sistema, la regulación del SGSSS ha presentado serias deficiencias en tres sentidos: (i) el tamaño y calidad del regulador en relación al sistema, (ii) la insuficiencia de información y (iii) la obesidad normativa.

- i. Los problemas de regulación y supervisión del sistema de salud no se limitan a las dificultades relacionadas

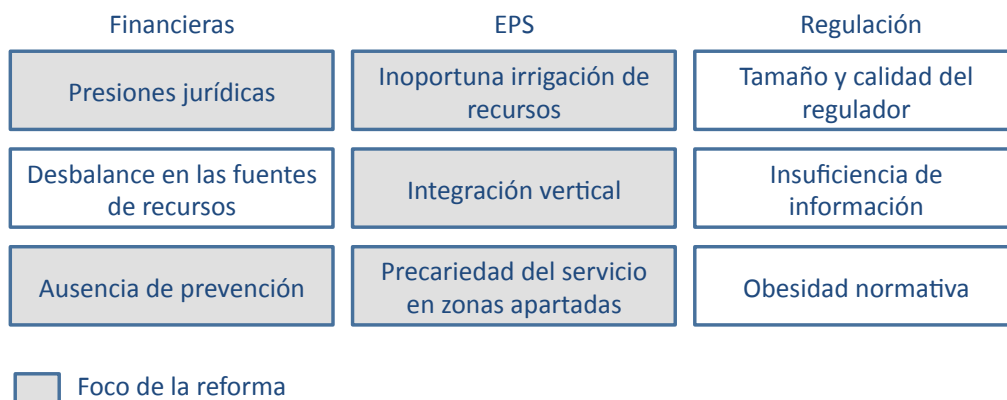
con la integración vertical del sistema. Hasta hace poco tiempo, la Superintendencia de Salud se caracterizó por su politización y todavía carece de la fortaleza técnica, financiera e institucional que requeriría para vigilar más de 13 mil entidades con casi 18 mil sedes en todo el país.

- ii. Tanto la Superintendencia como el Invima, además, poseen escasa información sobre la eficacia de ciertos medicamentos, lo cual ha llevado a que una proporción significativamente alta de los recobros se hayan originado en medicinas de alto costo, de las cuales no existen análisis costo/beneficio que permitan demostrar su eficiencia.
- iii. Por si lo anterior fuera poco, el sistema de salud colombiano se encuentra enmarcado dentro de un exceso de normas. La inflación normativa ha generado más de 6 mil normas sobre la actividad, las cuales han vuelto el sistema complejo y, por tanto, han dificultado la labor de vigilancia de la Superintendencia de Salud.

¿Qué plantea la Reforma?

De los nueve principales problemas del sistema de salud colombiano, el Ministerio de Salud ha manifestado, en la primera socialización de la reforma, que atenderá cinco de ellos: presiones jurídicas -delimitará los servicios que ofrecerá el SGSSS a través del establecimiento de un Plan Integral de Salud que eliminaría la distinción actual entre el POS y el no-POS-; ausencia de prevención -desarrollará programas de promoción y prevención-; inoportuna irrigación de liquidez -eliminará los estímulos al atesoramiento de liquidez-; integración vertical -abolirá la integración vertical entre las EPS y las redes de atención especializadas, aunque permitirá la integración vertical con las redes de atención básicas-; y precariedad del servicio en zonas apartadas -aumentará el acceso de los servicios a las minorías étnicas y en las zonas dispersas- (Gráfico 1).

Gráfico 1
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR SALUD Y FOCO DEL BORRADOR DE LA REFORMA



Fuente: Elaboración Fedesarrollo.

Por lo que se ha podido conocer de la reforma, esta tiene como filosofía instaurar una red de funcionamiento descentralizada que estaría conformada por tres agentes: una entidad gubernamental que manejará los recursos, unos entes administradores del servicio que se encontrarán distribuidos a lo largo del territorio nacional y unos prestadores de la asistencia en salud o IPS. El gobierno ha planteado que con estas nuevas instituciones no se pretende crear una entidad como lo fue en su momento el Seguro Social (ISS), puesto que esta desarrollaba autónomamente las labores de los nuevos tres agentes, sino dinamizar el papel de todo el conjunto de entidades al interior del sistema de salud.

Específicamente, la reforma propuesta contempla cuatro componentes en la reestructuración del sistema.

Un primer componente focaliza el manejo de los fondos de la salud en una sola entidad, respondiendo a la preocupación por el represamiento de la liquidez que en los últimos años caracterizó al Fosyga y a muchas EPS. Con este propósito se elimina el actual Fosyga y en su lugar surgiría Mi-Salud, una entidad pública con autonomía

administrativa, financiera y presupuestal, que se esperaría respondiera por la afiliación, el recaudo y la distribución de recursos financieros dentro del sistema, irrigándolos desde el gobierno hacia las instituciones prestadoras del servicio de salud.

El segundo componente tiene como finalidad reestructurar la labor de las EPS dentro del sistema. En síntesis son tres los cambios que se vislumbran en este frente. El primero hace referencia a la transformación en su naturaleza: pasarían de ser intermediarias financieras a administradoras de la salud poblacional. De esta forma se esperaría que las EPS no tuvieran acceso al manejo de recursos financieros del sistema. El segundo cambio eliminaría la integración vertical de las EPS en el nivel de atención especializada, permitiéndolo solamente en los niveles de atención básica. El tercero especifica el tipo de actividad que realizarían como administradoras. Las EPS se convertirían en responsables tanto de la atención básica como especializada del área o grupo poblacional que les sea asignado, bajo la obligación de garantizar un número mínimo tanto de entidades de prestación de servicios como de afiliados. De esta forma se pretende asegurar

el acceso al servicio de salud en lugares apartados. La reforma abre la posibilidad de que ciertas autoridades territoriales, como las secretarías de salud de municipios o departamentos, si cumplen ciertos requisitos que aún no se conocen, sean igualmente entes administradores dentro del sistema.

Un tercer componente que contempla la reforma se encarga de establecer la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado, que en los últimos años se fundamentaban en la presencia de un exhaustivo Plan Obligatorio de Salud. La problemática generada por la falta de una definición clara de los límites en los servicios contemplados para cada régimen, y su consecuente necesidad de una ley estatutaria, motivó esta parte de la propuesta del Ministerio de Salud, a través de la cual se crea el Plan Integral de Salud, el cual pretende exponer de manera explícita las patologías que no incluye el sistema, en lugar de los tratamientos específicos que sí incluye, como sucede hoy en el POS.

En relación con la corrupción del aparato de salud, la cuarta propuesta tiene como objetivo brindar a la Superintendencia de Salud mejores mecanismos de control, los cuales no han sido presentados por parte del gobierno.

Reflexiones y elementos de preocupación

Las reflexiones acerca de la primera socialización realizada por el gobierno sobre la reforma a la salud pueden concentrarse en tres aspectos: las problemáticas del sistema que la reforma no aborda, las problemáticas que afronta pero en las cuales no hay claridad sobre los mecanismos de implementación y las problemáticas sobre las que hay conocimiento de los instrumentos que se emplearían, pero que generan preocupación por su diseño.

Las carencias del sistema de salud que la reforma no aborda son cuatro: la problemática del crecimiento despro-

porcionado del régimen subsidiado *vis-a-vis*, el contributivo y las tres relacionadas con las deficiencias en el proceso de regulación y supervisión: exceso normativo, escasez de recursos para la vigilancia y fallas institucionales para el manejo de información sobre la eficacia de medicamentos y procedimientos costosos.

De las problemáticas que la reforma abordará, todavía son más las preguntas que las respuestas sobre la forma cómo el nuevo sistema puede operar en la práctica.

El cambio en la concepción del POS y la definición de un Plan Integral de Salud constituyen quizás los elementos más interesantes de la propuesta. Ciertamente, ello puede ayudar a moderar las presiones jurídicas sobre el sistema que se dan a través de las tutelas. No existe claridad sin embargo sobre la forma específica en que se haría el cambio ni sobre la necesidad de hacerlo por la vía legal, en lugar de un proceso reglamentario que redefina el propio POS.

Algo similar sucede con la definición de prácticas de prevención en salud y con la idea de mejorar el acceso a la salud de comunidades apartadas. Se trata de buenos y loables propósitos y de aspectos que ameritan mayor atención por parte del Ministerio de Salud, pero no por ello es claro que requieran de una Ley, más que de procesos de reglamentación adecuados.

Lo que resulta francamente preocupante es que en aras de objetivos loables pero con mecanismos poco definidos, termine por desmontarse un sistema de aseguramiento con competencia entre EPS, que le ha servido al país durante casi veinte años. Es claro que muchas de las EPS, especialmente en el régimen subsidiado, ameritan una drástica reestructuración y probablemente su cierre o intervención por parte del sector público. Ello no significa, sin embargo, que deba desmontarse el sistema en su conjunto, llevándose de paso a las instituciones que sí funcionan.

Por otra parte, resulta difícil entender las razones por las cuales una nueva entidad pública de enormes dimensiones (Mi-Salud) vaya a ser más ágil y eficiente en la realización de los pagos de lo que son actualmente varias de las mejores EPS privadas e incluso algunas de las públicas, como la Nueva EPS, que se creó a partir del antiguo Instituto de Seguros Sociales. Las instituciones públicas de grandes dimensiones no han sido históricamente ejemplo de eficiencia y los argumentos por los cuales Mi-Salud pudiera ser una excepción están aún por conocerse.

La propuesta del Ministerio de Salud es peligrosamente ambigua sobre el papel que puede jugar el sector privado en el nuevo sistema. Aunque habla de gestores y administradores del sistema, no es clara por ahora la forma en que pueden operar. Particularmente preocupante resulta el hecho de que se elimine el papel asegurador de las entidades intermediarias. Ello puede conducir a que los nuevos intermediarios carezcan de responsabilidad en el proceso y dejen de exponerse financieramente en el cumplimiento de sus funciones. De las primeras declaraciones del gobierno sobre la reforma parece desprenderse que los intermediarios privados serían simples auditores de las actividades de las IPS para facilitar los pagos por parte de una entidad pública como Mi-Salud. Si ello fuera así, los problemas de corrupción a gran escala podrían desatarse muy rápidamente. Es importante recordar que la corrupción no desaparece por escribir en una ley el deseo de que ello suceda. Los incentivos a la corrupción que hoy se manifiestan en los recobros al Fosyga podrían multiplicarse en un esquema como el que se sugiere para Mi-Salud, independientemente de la buena voluntad que tengan el gobierno y los legisladores para evitarlo. No es clara, en lo absoluto, la forma en que se controlaría a los hospitales y demás instituciones prestadoras de salud para que no facturen más servicios médicos de los realmente prestados ni para que lo hagan a precios competitivos. Esa es la función principal que cumplen actualmente las EPS y para ese propósito ponen su capital y su rentabilidad en juego. Reemplazarlas por la

buena voluntad de las Secretarías de Salud de municipios o departamentos o por gestores privados que no arriesgan su capital en el proceso parecería una decisión equivocada y posiblemente desastrosa. De hecho, no es claro cómo los departamentos o municipios auditarían de manera correcta a sus mismos hospitales: serían juez y parte en el proceso de prestación y facturación.

La distinción entre redes de atención básica y aquellas de atención especializada parece también un acierto de la propuesta pero no es clara la forma como operaría en la práctica.

No se entiende, por ejemplo, cómo se evitaría el riesgo moral en el traslado de pacientes desde entidades prestadoras de servicios básicos hacia instituciones prestadoras de servicios especializados manejados por gestores diferentes.

En términos generales, podemos afirmar que si bien la reforma propuesta trata de enfrentar problemas graves del sistema de salud colombiano, todavía no es claro que lo haga de una manera acertada. Lo grave de esto es que en el proceso puede desbaratar un sistema que a pesar de todos sus problemas ha contribuido enormemente a mejorar la salud de los colombianos durante los últimos dieciocho años. Un sistema que otros países han copiado en muchos de sus principales componentes y que entidades como el BID o el Banco Mundial suelen poner como ejemplo de políticas exitosas en el contexto internacional. Hay que hacer reformas pero más vale que haya seguridad de estar creando algo mejor a lo vigente, antes de proceder a desbaratar aquello que funciona. Posiblemente un mayor esfuerzo por mejorar la gerencia del sistema y por ajustar elementos específicos de su funcionamiento, pasando por ejemplo por intervenir muchas de las EPS del régimen subsidiado que no cuentan con las condiciones para seguir operando, sería una estrategia mejor y menos riesgosa que una reforma legal con vacíos y deficiencias importantes como la que se intuye a partir de los primeros planteamientos del gobierno.

La subasta de 4G y la competencia en el mercado de telecomunicaciones móviles en Colombia

Los debates sobre el sector de telecomunicaciones en Colombia han cobrado gran importancia en los últimos meses, impulsados por la compleja situación competitiva de la industria y los recientes anuncios del Gobierno en relación con la subasta del espectro para la implementación de la tecnología 4G. Existe gran expectativa por parte de los analistas y los distintos agentes del mercado sobre los términos y condiciones finales de participación en dicha subasta, no solo por razones fiscales, pues de los recursos allí obtenidos dependen los proyectos de telecomunicaciones sociales del Fondo TIC, sino porque los resultados derivados de la puja tendrán importantes consecuencias tanto en la estructura del mercado como en el bienestar de los consumidores.

Así las cosas, el presente artículo pretende resumir los aspectos más relevantes a tener en cuenta sobre el panorama competitivo de la industria de telecomunicaciones móviles en el país. Para este propósito, se lleva a cabo una revisión de tres trabajos realizados recientemente en Fedesarrollo: uno sobre políticas de competencia en Colombia (Bardey, Cabrera y Becerra, 2012), otro sobre la promoción de la competencia en el sector de telecomunicaciones (Benavides y Castro, 2012) y finalmente, un informe donde se evalúa el impacto que han tenido los cambios en el marco regulatorio sobre los sectores TIC y Postal (Yepes, 2012).

1. Las telecomunicaciones móviles en Colombia

1.1. Panorama general

El servicio de telefonía móvil lleva 18 años de operación en Colombia. A pesar del crecimiento del mercado en términos de usuarios, diversidad de servicios y cobertura geográfica, la estructura del mercado por el lado de la oferta ha tendido a la consolidación de grandes operadores con ofertas convergentes y soluciones integradas, lo que ha impedido la entrada de nuevos jugadores y la dinamización de la competencia. Es cierto que, en general, el sector de telecomunicaciones cuenta con pocos operadores por país, debido principalmente a los altos costos de entrada (inversiones en infraestructura necesaria para operar) y al hecho de que funciona como una economía de red¹. Sin embargo,

¹ Las economías de red se caracterizan porque la utilidad de un consumidor aumenta conforme aumenta el número de consumidores con ese mismo producto

el mercado colombiano resalta dentro de la región por sus altos grados de concentración. El mercado local cuenta con la presencia de un operador dominante -Claro- sobre el cual existe evidencia estadística de insuficiente presión competitiva por parte de otros operadores (Benavides & Castro, 2012)². De otro lado, las altas proporciones de llamadas entre usuarios de un mismo operador (*on-net*) sugieren que está teniendo lugar el *efecto club*, lo cual intensifica la posición dominante de la compañía líder (Gráfico 1).

El *efecto club* se refuerza en el caso colombiano por la existencia de diferenciales entre tarifas *on-net* y *off-net*, que según Jullien *et al.* (2011) oscilan entre 30-40%. En adición, los altos costos de terminación de llamadas³, que castigan con más fuerza a los operadores pequeños (cuyos usuarios deben realizar en promedio mayor número de llamadas *off-net*), representan una barrera a los potenciales entrantes. Aunque la Comisión de regulación de

comunicaciones (CRC) ha realizado importantes esfuerzos para reducir los fallos de mercado mediante la expedición de resoluciones que, en su conjunto, han contribuido a mejorar las condiciones competitivas (Yepes, 2012), el panorama del sector de telefonía móvil en el país no parece alentador en términos de competencia.

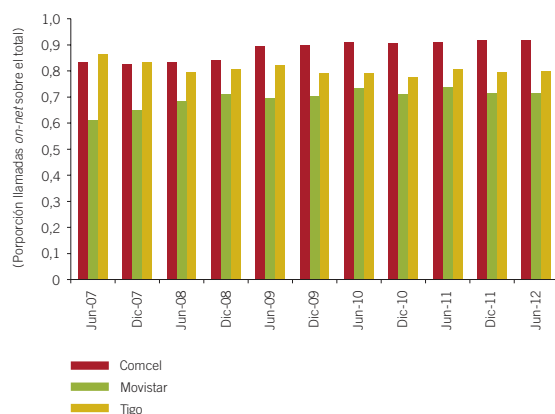
En este contexto, la subasta de segmentos de AWS y 2,500 Mhz, frecuencias en las que es posible prestar los veloces servicios de cuarta generación (4G), representa una oportunidad para reestructurar la realidad competitiva del mercado, toda vez que la reasignación diferencial del espectro permitiría balancear las asimetrías en las participaciones de los operadores.

1.2. El mercado de telefonía e internet móvil en cifras

a. Cobertura

El mercado de telefonía móvil en Colombia ha tenido mejoras sustanciales en términos de cobertura. El índice de penetración ha presentado un crecimiento significativo desde el año 2003, momento en el cual entró el operador Tigo (en ese momento Ola), pasando de 14,8 líneas por cada 100 habitantes a 98,45 líneas siete años más tarde. Además, el sector de telefonía celular registró un crecimiento promedio anual cercano al 30% en el periodo comprendido entre 2004 y 2012. A partir de 2008 se observa un menor ritmo de crecimiento en el sector, en parte porque la proporción de la población no cubierta por los servicios de telefonía móvil es cada vez menor. Por su parte, en 2011 el número de dispositivos móviles voz a voz fue igual al tamaño de la población, y en el tercer trimestre de 2012 lo superó en un 5% (Gráfico 2).

Gráfico 1
PROPORCIÓN TRÁFICO ON-NET/TOTAL

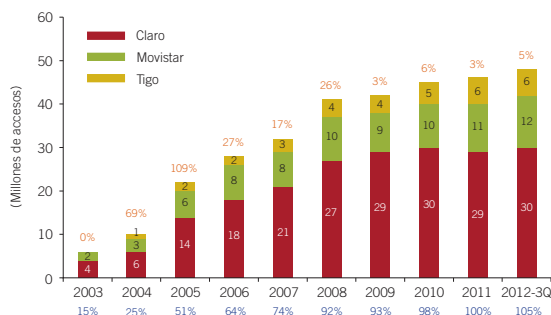


Fuente: Yepes (2012) elaborado con datos de la CRC.

² La resolución 2062 de 2009 reconoce su posición de dominancia.

³ Los costos de terminación de llamadas son tarifas que deben pagar los operadores por llamadas terminadas en redes de otros operadores (pagos entre operadores)

Gráfico 2
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL,
2003-2012 (3Q)



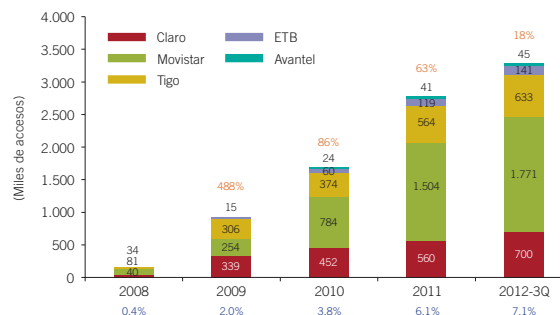
Nota: Valores en porcentaje de color naranja corresponden al crecimiento y valores en porcentaje de color azul corresponden a la penetración.
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE, CRC y MinTIC.

El gran desafío es ahora el acceso a Internet. Según el DANE (2011), sólo el 23,4% del total de hogares del país poseen conexión a Internet (30% en las cabeceras y 2,4% en el campo). Los indicadores son aún más bajos en el caso del Internet móvil, para el cual la penetración del mercado respecto a la población total fue apenas 7,1% el tercer trimestre del año pasado. A pesar de la baja cobertura las tasas de crecimiento del mercado tampoco evidencian una mayor dinámica del sector hasta el momento. Mientras que en 2010 la industria de Internet móvil tuvo un crecimiento anual de 86%, en 2011 fue de 63% y en 2012 de tan solo 18% (Gráfico 3).

b. Precios por minuto

En comparación con otros países de ingreso similar, el precio por minuto *on-net* en prepago es relativamente bajo en Colombia (ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo -PPA-). Mientras que en 2011 el precio por minuto en Colombia se ubicó en 0,28 dólares, superior en solo dos centavos de dólar al promedio mundial, el de Latinoamérica se contabilizó a 0,38 dólares. Sin embargo, el precio por minuto en pospago (excepto en planes de bajo consumo) se ubica por encima del promedio latinoamericano y del

Gráfico 3
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE INTERNET MÓVIL,
2008-2012 (3Q)



Nota: Valores en porcentaje de color naranja corresponden al crecimiento y valores en porcentaje de color azul corresponden a la penetración.
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE, CRC y MinTIC.

de países de ingreso medio alto. Por su parte, la velocidad de reducción de precios entre 2008-2010 en Colombia fue de 8%, menos de la mitad del ritmo de caída en precios en el mundo y en Latinoamérica (16,8% y 16,5%, respectivamente).

c. Composición del mercado

El mercado de telefonía móvil en Colombia es altamente concentrado. Mientras que el 62,4% de los suscriptores totales pertenecían a Claro en 2011, entre Movistar y Tigo tan solo sumaban el 37,1%. Por su parte, tal y como se espera de una economía de red, Claro acaparó el 77,57% del total de minutos de ocupación en servicios de voz, Movistar el 17,24% y Tigo el 5,17%. Finalmente, la participación sobre los ingresos netos del mercado total fue de 63,8% para Claro, 23,1% para Movistar y 12,4% para Tigo (Cuadro 1)

De otro lado, el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), que mide la concentración de un mercado, muestra que Colombia es el tercer país más concentrado de la región. Ese índice es 5.336, que se compara con un promedio latinoamericano de 4.401.

Cuadro 1
ÍNDICE DE HERFINDAHL-HIRSCHMAN Y PRECIOS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LATINOAMÉRICA

País	Operadores	HHI por número de subscriptores (2010)	Minuto Prepago On-net (2011)	Penetración (2011)
Honduras	2	7,066	0.2	101.08
México	4	5,494	0.1	92.71
Colombia	3	5,336	0.18	31.8
Ecuador	3	5,225	0.18	104.55
Nicaragua	2	5,200	0.41	82.15
Perú	3	5,058	0.62	99.4
Panamá	2	5,028	0.12	45.79
Dominicana Rep.	3	4,646	0.2	87.22
Paraguay	4	3,986	0.17	99.4
Venezuela	3	3,752	0.43	148.62
Chile	3	3,613	0.14	31.8
Guatemala	3	3,532	0.11	89.02
Bolivia	3	3,452	0.22	85.33
Costa Rica	4	3,444	0.07	23.13
Argentina	4	3,195	0.53	54.26
Brasil	7	2,485	0.71	85.33

Fuente: (BBC, 2012) elaborado con datos de Galparin (2009), entidades reguladoras y de Comunicaciones, MinTIC.

1.3. Desafíos regulatorios

En el mundo entero el sector de telecomunicaciones ha sido una industria compleja de regular. Algunas razones son: i) Los precios que establecen los operadores son necesariamente superiores a los costos marginales (costo de brindar el servicio a un usuario más), debido a que las compañías realizan grandes inversiones iniciales en infraestructura las cuales deben ser amortizadas; ii) La costosa inversión inicial constituye una barrera a la entrada a potenciales operadores, efecto que se refuerza por la velocidad de los cambios tecnológicos obliga a que las compañías anticipen la rápida devaluación de sus inversiones, iii) las externalidades de red presentes en el sector generan conflictos y dilemas entre la búsqueda de beneficio de corto plazo para el consumidor y la eficiencia del mercado. En particular, como se mencionó anteriormente, la existencia de cargos de terminación de

llamadas incrementa dichas externalidades, en la medida en que sirven de incentivos para que los usuarios cuyos contactos están afiliados a un mismo operador refuercen el llamado *efecto club*. Además, los cargos de terminación representan otra barrera a potenciales entrantes pues son costos que, al comienzo, deberán pagar inevitablemente a las compañías ya establecidas, debido a la alta proporción de llamadas *off-net*. Por esa razón, la resolución 3534 de 2012 de la CRC obliga a que esos cargos de terminación se reduzcan gradualmente y desaparezcan del todo en 2015. Asimismo, la resolución 4001 de 2012 decreta que los ahorros que se generen producto de los menores pagos por cargos de terminación, deberán transferirse directamente a los usuarios ya sea por medio de reducción de tarifas o incrementando la inversión en infraestructura.

En síntesis, las características mismas del sector de telecomunicaciones conducen a fallas de mercado que

requieren de intervención por parte del ente regulador. En ese sentido, Yepes (2012) muestran que la CRC ha enfrentado los retos regulatorios mediante la expedición de tres resoluciones que, en conjunto, han mejorado las condiciones competitivas del sector a partir de 2009. Mientras que la resolución 2058 estableció los criterios de definición de mercados relevantes en el sector de telefonía móvil, la resolución 2062 reconoce que Comcel (hoy en día Claro) cuenta con una posición dominante en dicho sector, lo que dio pie para que con la resolución 2066, las tarifas *on-net* y *off-net* de Claro se convirtieran en sujetos de regulación. Lo anterior representa una intervención ex-ante, cuyo objetivo es mitigar la dinámica de mayor concentración de mercado desencadenada por el *efecto club* que beneficia cada vez más al operador con poder de mercado.

2. La subasta de espectro para 4G

2.1 La importancia de la subasta

La relevancia de la nueva subasta es la de permitir la implementación de la tecnología 4G y, en consecuencia, ofrecer servicios de última generación a menores costos. Al respecto, Katz & Flores-Roux (2011) estimaron que la subasta traerá consigo una ampliación de la cobertura de internet móvil en Colombia a cerca del 90% de la población (actualmente 23,4%)⁴. Así, se trata de una oportunidad de convergencia para los mercados de telefonía e internet móvil y, al mismo tiempo, es un as bajo la manga que tiene el MinTIC para mejorar las condiciones competitivas del sector.

2.2 Los dilemas de política

En la asignación de espectro de telecomunicaciones por parte del gobierno se pueden generar dilemas importantes.

El primero de ellos tiene que ver con la cantidad que se asigna. Staple y Kevin (2004) sostienen que en la medida en que un país asigne mayor cantidad de espectro, habrá menores intenciones de inversión en infraestructura por parte de los operadores. La razón es que si las compañías de telecomunicaciones esperan que el Gobierno asigne pronto nuevos segmentos del mismo, no habrá motivos para invertir en una tecnología que permita una mejor utilización de los que disponen hasta el momento. En ese sentido, los autores concluyen que la cantidad de espectro a asignar y la inversión en tecnología eficiente son bienes sustitutos -bienes que cumplen la misma función y que en consecuencia permiten reemplazarse mutuamente-.

El otro gran desafío de política tiene que ver con que en el proceso de asignación del espectro, el operador dominante no sólo tiene la mayor disponibilidad de caja para enfrentar un proceso de subasta, sino que cuenta con una infraestructura ya instalada que le permitiría ofertar mucho más dinero que los demás, manteniendo similares casos de negocio. De esta forma, se materializaría una ventaja que terminaría por acentuar su poder de mercado. Por otra parte, sin embargo, esto permitiría una llegada más rápida y segura de las nuevas tecnologías a las zonas más apartadas del país, aquellas en las cuales difícilmente pueda llegar un entrante en el corto plazo. La disyuntiva entre cobertura y competencia ha gobernado el debate sobre la asignación, planteando un complejo dilema de política pública.

2.3 Consideraciones de política

Según Benavides & Castro (2012), la correcta valoración y explotación del espectro electromagnético debe tener en cuenta 3 elementos: los ingresos del Gobierno en

⁴ La cobertura se define como el porcentaje de habitantes que viven en zonas cubiertas (donde hay red y se comercializa el servicio). Así, la cobertura es siempre mayor a la penetración, a la cual se hizo referencia atrás, la cual se refiere a accesos/población.

la subasta, el beneficio del consumidor y la inversión en tecnología. Ante el reciente anuncio de una posible fusión entre Tigo y UNE, MinTIC resolvió aplazar la publicación del borrador final de las condiciones de la subasta pues el nuevo escenario hacía necesario replantear las reglas de juego, de forma que pudieran cumplirse los tres objetivos señalados.

El pasado 20 de febrero se presentó el documento en el cual se definieron las condiciones para la subasta: se reservarán bloques para potenciales entrantes (competidores nuevos) tanto para la frecuencia AWS como para la de 2.500 Mhz. Además, los entrantes contarán con *bidding credits*, que en términos generales permiten que tales agentes paguen un precio por debajo del que deberán pagar los operadores que ya están establecidos. Por otra parte, se abrió la posibilidad de subastar una cantidad de espectro menor, dependiendo de la cantidad de nuevos operadores interesados en participar en la puja. Todo lo anterior está en línea con las propuestas planteadas desde Fedesarrollo por Benavides y Castro (2012) y son consistentes con la conveniencia de incentivar la participación de nuevos competidores en la subasta.

Por lo demás, Benavides y Castro (2012) proponen un formato de subasta híbrido en el que los operadores realicen ofertas abiertas y ascendentes en la primera fase y, cuando sólo queden dos participantes, se proceda a una oferta ciega de primer precio (los participantes ofrecen

sin conocer la oferta del otro operador y la mayor oferta gana). Esta última etapa es clave en tanto incrementa el ingreso esperado del Gobierno y al mismo tiempo reduce las posibilidades de colusión entre los participantes.

De otro lado, es importante que el MinTIC se anticipe a escenarios en que uno de los operadores acapare todo el espectro subastado. Para ello, es importante establecer mecanismos que eviten tales resultados indeseados, por ejemplo mediante restricciones de participación al operador dominante en algunos de los bloques. Adicionalmente, es necesario imponer obligaciones de cobertura a los ganadores de segmentos en el espectro, de manera que sea posible monitorear el cumplimiento de las metas de penetración que ha fijado el Gobierno. Por último, para evitar la participación de operadores cuyas intenciones se distancien de lo previsto, vale la pena restringir la posibilidad de reventa de los bloques, por un tiempo suficientemente largo.

En síntesis, los objetivos que persigue el MinTIC debe combinar avances en cobertura y calidad, por un lado, y una mejora en competencia, por el otro, propósitos que no siempre son complementarios entre sí. Una subasta bien diseñada para los espectros que permiten el desarrollo de la tecnología 4G en Colombia, en conjunto con el paquete de medidas que ha venido implementando la CRC, conforman una dupla de ases que brindan un buen punto de partida para arbitrar exitosamente en esta disyuntiva.

Bibliografía

Bardey, David, Becerra, Alejandro & Cabrera, Pilar, *Análisis económico de la normativa de libre competencia en Colombia*, Fedesarrollo, 2012.

Benavides, Juan & Castro, Felipe, *Promoción de la competencia en la telefonía móvil de Colombia*, Fedesarrollo, 2012.

Yepes, Tito, *Impacto del marco regulatorio expedido por la CRC entre los años 2009 y 2011 para los sectores TIC y Postal*, Fedesarrollo, 2012.

Congreso de la República de Colombia, *Ley 1341 de 2009*.

CRC, *Propuesta regulatoria: regulación de mercado. Revisión de cargos de acceso para redes móviles*, 2012.

CRC, *Resolución 1763, 2007*.

CRC, *Resolución 2066, 2009*.

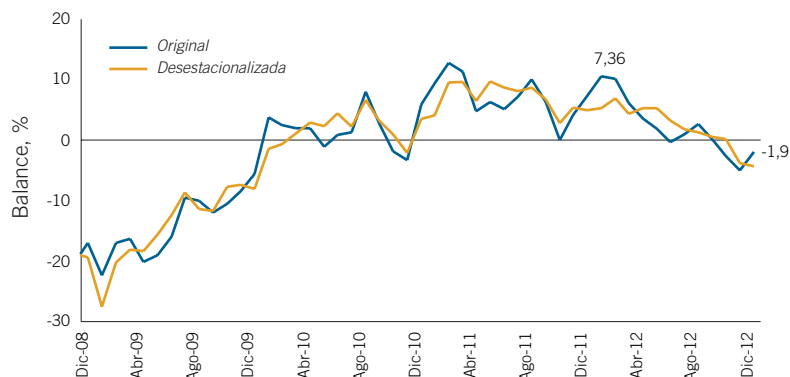
CRC, *Resolución 3534, 2012*.

CRC, *Resolución 4001, 2012*.

Dane, *Boletín de prensa de los indicadores básicos de TIC, 201*. Disponible en: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_2011.pdf

Staple, Gregory & Kevin, Werbach, The end of spectrum scarcity, IEEE Spectrum/Na, 2004.

Gráfico 1. Índice de Confianza Industrial (ICI)

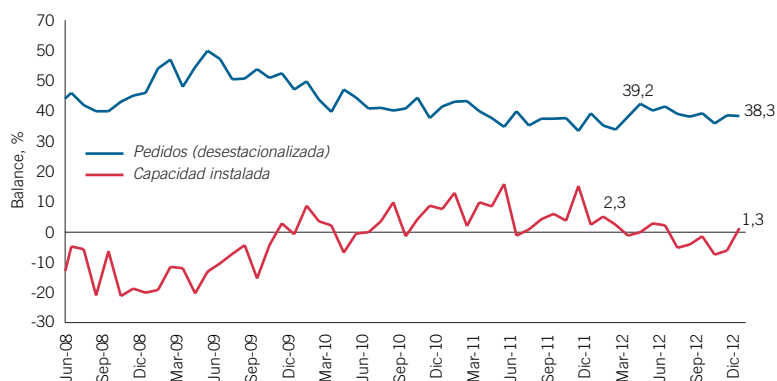


Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) - Fedesarrollo.

En diciembre, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se ubicó en terreno negativo, exhibiendo un retroceso de 9,3 puntos porcentuales (pps) respecto al nivel observado en el mismo mes un año atrás.

Durante 2012 el promedio observado del ICI fue 2,2%, cifra que resulta inferior a la observada durante el mismo periodo de 2011 (7,1%).

Gráfico 2. Percepción sobre demanda industrial

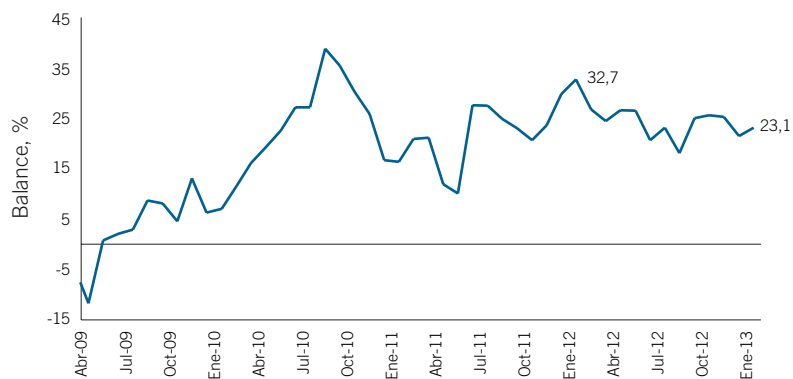


Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) - Fedesarrollo.

El balance de capacidad instalada se ubicó en diciembre de 2012 en 38,3%, de manera que por tercera vez consecutiva se reflejan balances inferiores al cierre del año inmediatamente anterior.

En diciembre los pedidos presentaron una mejora en la tendencia descendente de los últimos meses. No obstante, su nivel fue inferior a los niveles registrados en los diciembre de 2010 y 2011.

Gráfico 3. Índice de Confianza del Consumidor (ICC)



Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo.

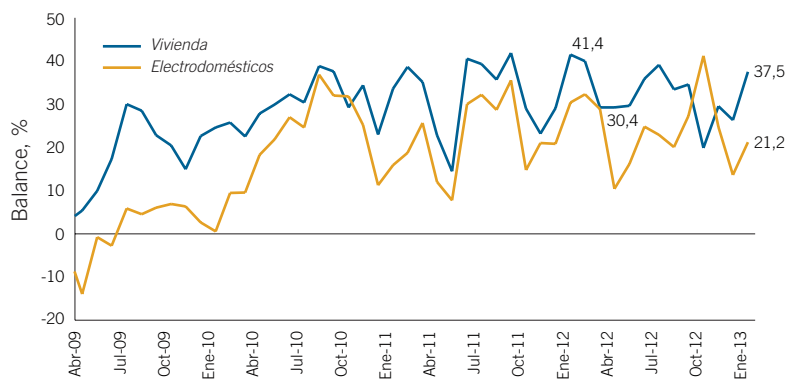
En enero el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 23,1%, revelando un deterioro de 9,6 puntos porcentuales (pps) respecto a enero de 2012.

El ICC presentó una ligera mejora (de 1,7 pps) respecto al mes inmediatamente anterior y se ubica por encima de los niveles que se observaron para el mismo mes en 2009, 2010 y 2011.

En enero la disposición a comprar vivienda mejoró de manera importante en los estratos medio y bajo. Para el conjunto de los encuestados ese balance se ubicó en 37,5%, lo cual se compara favorablemente con 26,3% en diciembre.

La disposición a comprar electrodomésticos para el mes de enero se ubicó en 21,2%, mejorando en 7,6 pps el valor registrado el mes inmediatamente anterior.

■ Gráfico 4. Evolución de la disposición a comprar bienes durables y no durables

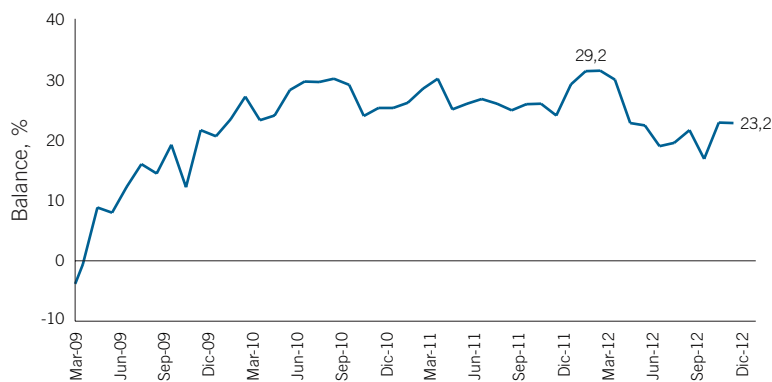


Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo.

El nivel de confianza comercial en el último mes de 2012 resultó inferior en 6 pps al observado un año atrás y en 2,1 al contrastar con diciembre de 2010.

El Índice de Confianza Comercial (ICCO) en diciembre continuó con la mejora que se venía observando desde octubre de 2012 y se ubicó en 23,2%.

■ Gráfico 5. Índice de Confianza Comercial (ICCO)

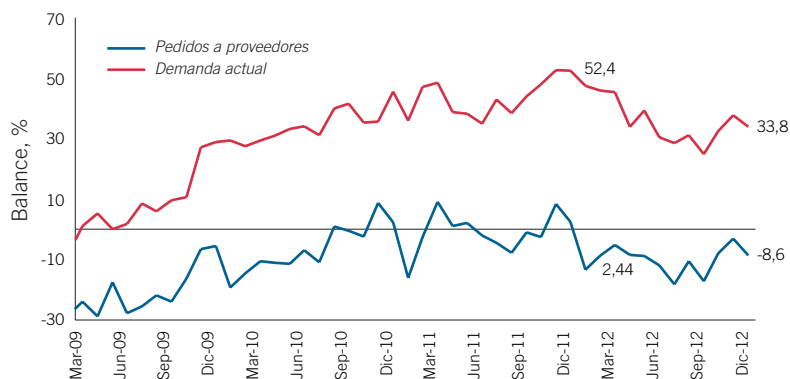


Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) - Fedesarrollo.

En diciembre la demanda a los comerciantes presentó un balance de 33,8%, casi 20 pps por debajo del nivel observado en diciembre de 2011.

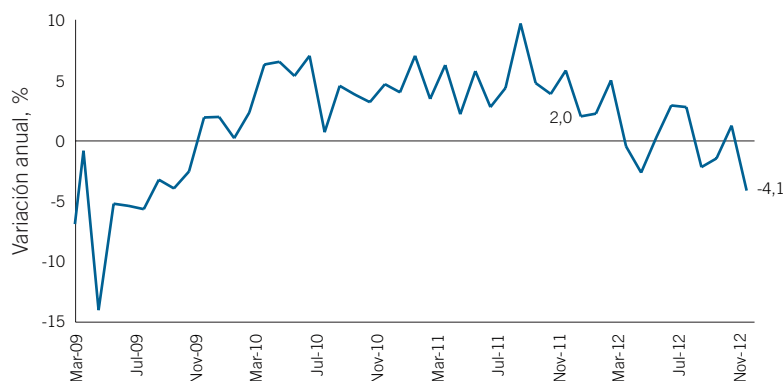
Los pedidos a proveedores presentaron en diciembre una disminución con respecto a noviembre y su balance fue casi 10 pps inferior al manifestado en diciembre de 2011.

■ Gráfico 6. Evolución de los pedidos y de la demanda



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) - Fedesarrollo.

Gráfico 7. Índice de Producción Industrial sin trilla de café



Fuente: DANE.

En noviembre el Índice de Producción Industrial (IPI) sin trilla de café decreció 4,1%, explicado principalmente por la contracción superior al 10% en las industrias de la confección, de minerales no metálicos y de los ingenios.

Entre enero y noviembre de 2012, la producción real del sector manufacturero, sin incluir trilla de café, aumentó 0,2% respecto al mismo período de 2011.

Cuadro 1. Evolución de las áreas aprobadas para vivienda según licencias de construcción a octubre

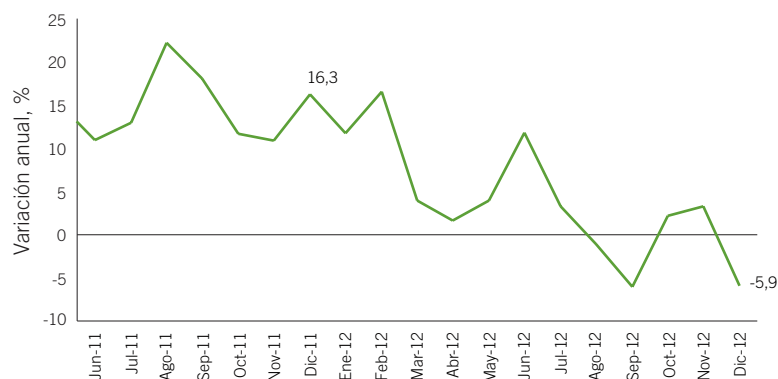
Departamentos y Bogotá	Porcentajes			
	Anual	Año corrido	Doce meses a octubre	Mensual
Bogotá	52,88	-37,77	-46,59	-38,93
Cundinamarca	-66,57	-58,31	-46,89	45,02
Valle	93,57	-48,47	-44,19	29,68
Antioquia	-29,25	-4,41	2,51	35,81
Atlántico	-80,18	18,26	55,93	-86,28
Bolívar	-44,84	45,23	84,08	-80,02
Caldas	-16,94	-31,45	-23,45	8,19
Cesar	-91,16	34,93	13,27	-45,80
Santander	180,36	-3,27	8,81	-12,77
Total	-3,08	-23,13	-20,51	-12,54

Fuente: DANE.

En octubre de 2012 el área aprobada para vivienda disminuyó 3,1% respecto al mismo mes de 2011. La disminución se debió principalmente por la reducción en el área aprobada en Cundinamarca y Antioquia.

De enero a octubre de 2012 la disminución en el área aprobada para vivienda ha estado jalonada, principalmente, por Bogotá (-37,7%), Cundinamarca (-58,3%) y Valle (-48,4%).

Gráfico 8. Evolución del despacho de Cemento Gris



Fuente: DANE.

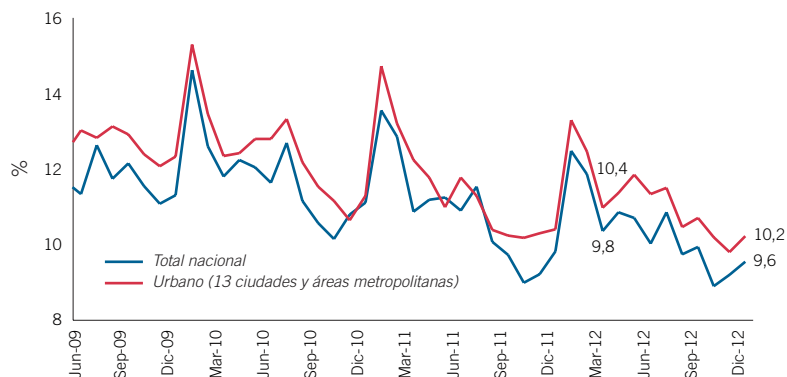
En diciembre el despacho de cemento gris disminuyó 5,9% con respecto al mismo mes de 2011. Esta contracción proviene de la reducción en los despachos a los canales de comercialización (-11,6%).

El principal retroceso en el despacho de cemento gris en diciembre se registró en Bogotá (-17,7%), mientras que el incremento más significativo fue en Cundinamarca (28%).

2012 finalizó con una tasa de desempleo total de 9,6%, cifra inferior a la observada un año antes (9,8%).

En diciembre, la tasa de desempleo urbano aumentó a 10,2%; no obstante, fue inferior en 0,2 pps al valor reflejado en el mismo mes del año anterior y 1 pp al promedio de 2012.

■ Gráfico 9. Evolución del desempleo

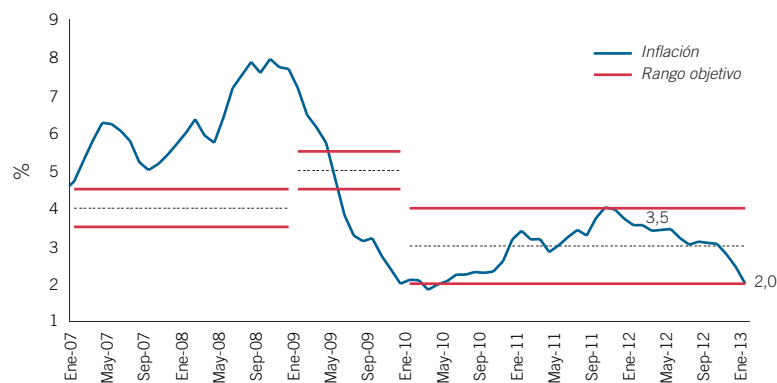


Fuente: DANE.

■ Gráfico 10. Inflación anual y rango objetivo del Banco de la República

La inflación se ubicó en 2,0% en enero, 1,54 pps inferior al dato del mismo mes de 2012. De esta forma, la variación del IPC se ubicó en el piso del rango meta del Banco de la República.

En enero la educación fue el grupo de gasto que más se encareció (4,59%), mientras que los precios del transporte fueron los que menos aumentaron (0,44%).

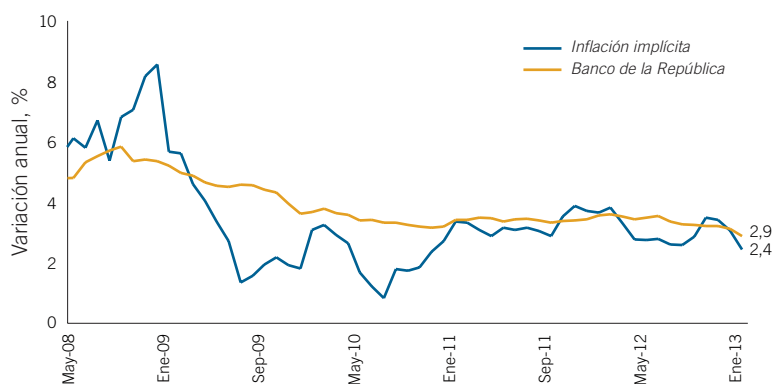


Fuente: DANE y Banco de la República.

■ Gráfico 11. Expectativas de inflación*

En enero continuó el descenso en las expectativas de inflación de los próximos 12 meses, tanto para el mercado como para las entidades encuestadas por el Banco de la República.

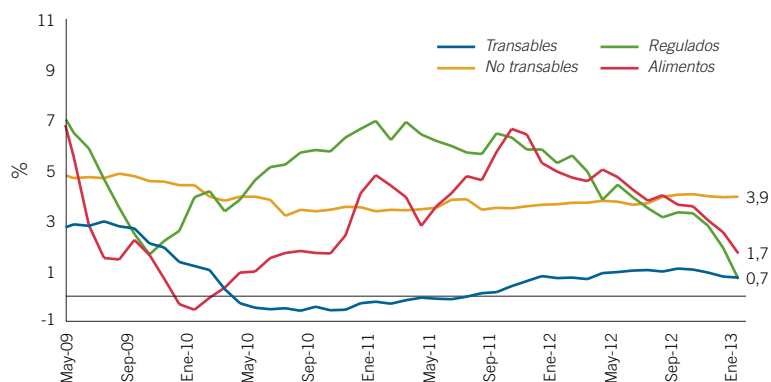
Las expectativas de inflación en enero se ubicaron por debajo del punto medio del rango meta establecido por el Banco de la República (2%-4%).



* 12 meses adelante.

Fuente: Banco de la República y Bloomberg.

Gráfico 12. Inflación por componentes con corte a enero de 2013

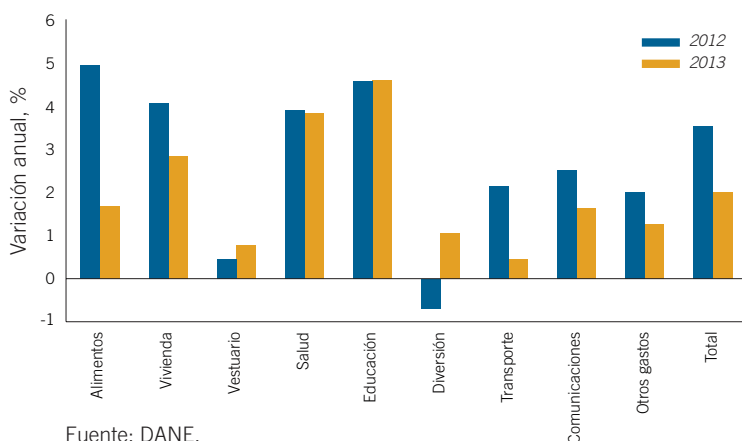


Fuente: Banco de la República.

En enero la inflación de los alimentos y de los bienes y servicios regulados continuó exhibiendo la tendencia a la baja presentada desde finales de 2011.

La inflación de bienes transables y no transables presentó en enero los mismos niveles de diciembre.

Gráfico 13. Inflación por tipo de gasto anual con corte a enero

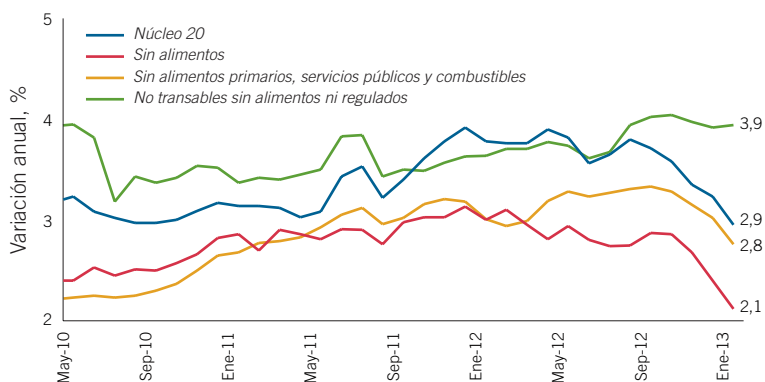


Fuente: DANE.

En enero la inflación de solo dos tipos de gasto (vivienda -2,8% y salud -3,8%) se encontraron dentro del rango objetivo del Banco de la República. La inflación de los alimentos, vestuario, diversión, transporte, comunicaciones y otros gastos estuvieron por debajo, mientras que la inflación de la educación registró un incremento por encima del techo del rango.

En contraste con enero de 2012, en enero de 2013 se registraron descensos significativos en el incremento de los precios de los alimentos y de transporte.

Gráfico 14. Evolución de las medidas de inflación básica



Fuente: DANE y Banco de la República.

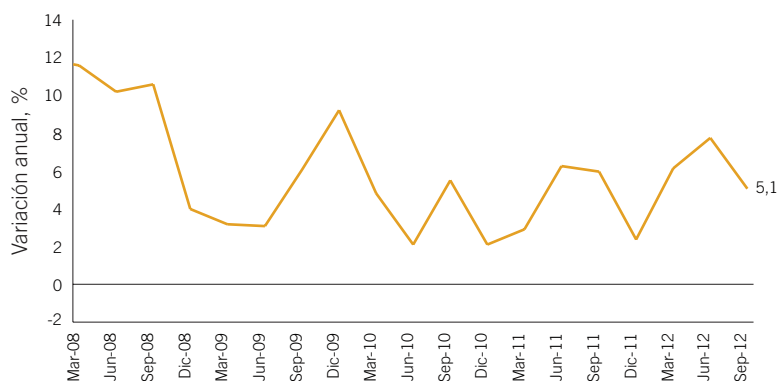
En enero la medida de inflación básica que más se desaceleró fue la inflación sin alimentos, ubicándose en el nivel más bajo de los últimos años.

Todas las medidas de inflación básica, excepto la inflación de no transables, registraron una fuerte caída en el primer mes de 2013.

En el tercer trimestre de 2012 el Índice de Precios de la Vivienda Usada (IPVU) creció 5,1% frente al mismo periodo del 2011, mientras que el crecimiento respecto al trimestre inmediatamente anterior fue del 2,1%.

El alza en los precios de la vivienda usada no cesa desde 2004. Desde entonces, y hasta el tercer trimestre de 2012, las casas y apartamentos usados se han valorizado un 78%, mientras la inflación acumulada del IPC ha sido solo del 45,6%.

■ Gráfico 15. Índice de Precios de la Vivienda Usada (IPVU)

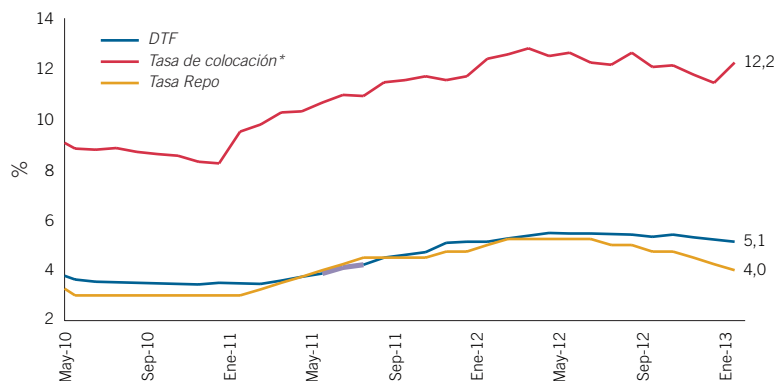


Fuente: Banco de la República.

La tasa Repo registró la quinta rebaja de 25 puntos básicos en los últimos siete meses, pasando de 5,25% en junio de 2012 a 4% en enero de 2013.

Pese a los descensos en la tasa repo y la DTF, la tasa de colocación registró en enero un incremento de 4 pps.

■ Gráfico 16. Repo, tasa de colocación y DTF



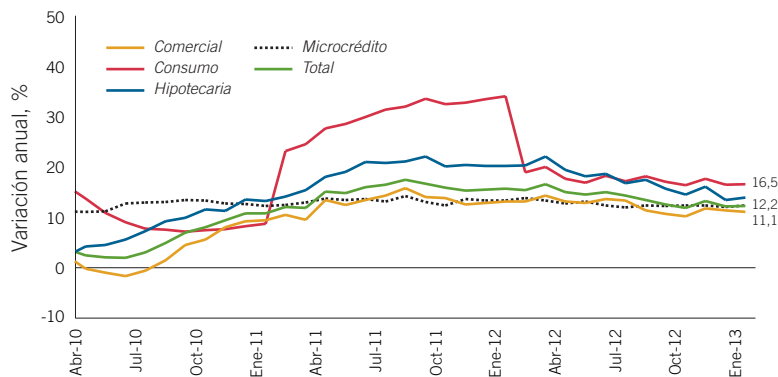
* La tasa de colocación total incluye créditos de consumo, ordinario, preferencial y tesorería.

Fuente: Banco de la República.

En enero el crecimiento de la cartera fue de 12,2%, manteniendo el nivel de diciembre de 2012.

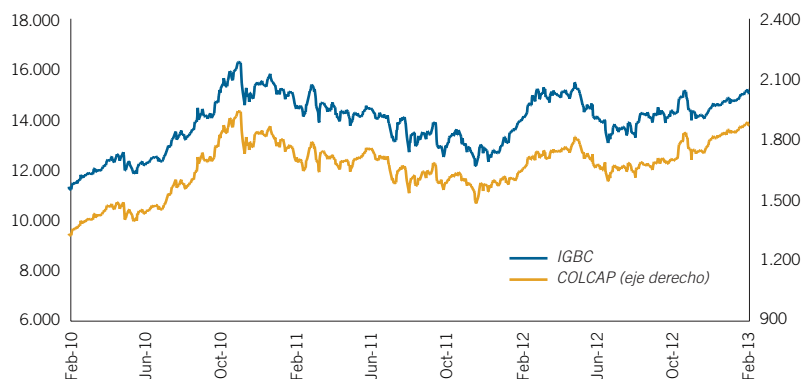
Como ha ocurrido desde inicios de 2011, en enero el crecimiento de la cartera estuvo impulsado por el crédito de consumo.

■ Gráfico 17. Evolución de la cartera real por tipo



Fuente: Banco de la República y cálculos Fedesarrollo.

Gráfico 18. Evolución IGBC y COLCAP

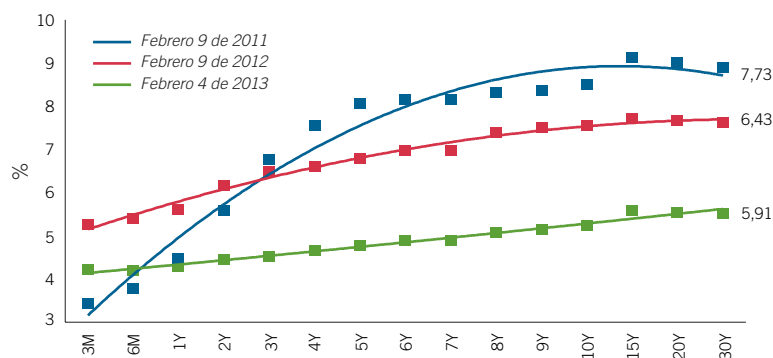


Fuente: Bancolombia.

En enero continuó la tendencia creciente en el IGBC y el COLCAP, los cuales se valorizaron en la misma proporción: 1,8%.

El incremento registrado en enero le permitió al COLCAP recuperar el nivel presentado a finales de 2010.

Gráfico 19. Curva de rendimientos TES para Colombia

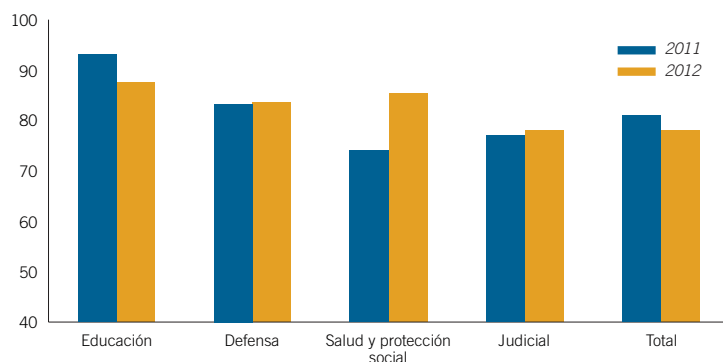


Fuente: Bloomberg.

La disminución de la tasa de intervención a finales de enero redujo los rendimientos de los TES para los vencimientos más cercanos.

La tendencia descendiente de los rendimientos de los TES en Colombia proviene de unas menores presiones inflacionarias.

Gráfico 20. Ejecución del gasto de funcionamiento por sectores con corte a noviembre



Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

La disminución de la tasa de intervención a finales de enero redujo los rendimientos de los TES para los vencimientos más cercanos.

La tendencia descendiente de los rendimientos de los TES en Colombia proviene de unas menores presiones inflacionarias.

|| Cuadro 2. Recaudo tributario (billones de pesos)

Durante octubre de 2012 el recaudo tributario fue ligeramente superior al registrado en igual mes de 2011.

Entre enero y octubre de 2012 se recaudaron más de 12 billones adicionales con respecto al mismo periodo en 2011, principalmente por el incremento en el recaudo del Impuesto de Renta (34%).

Año	Periodo	Tributos internos*	Tributos externos**	Total
2011	Octubre	3,3	1,5	4,7
2012	Octubre	3,4	1,4	4,8
2011	Enero-Octubre	59,9	13,7	73,6
2012	Enero-Octubre	72,1	13,9	86,1

* Incluye: Renta, IVA, Timbre, GMF, Patrimonio y Seguridad Democrática.

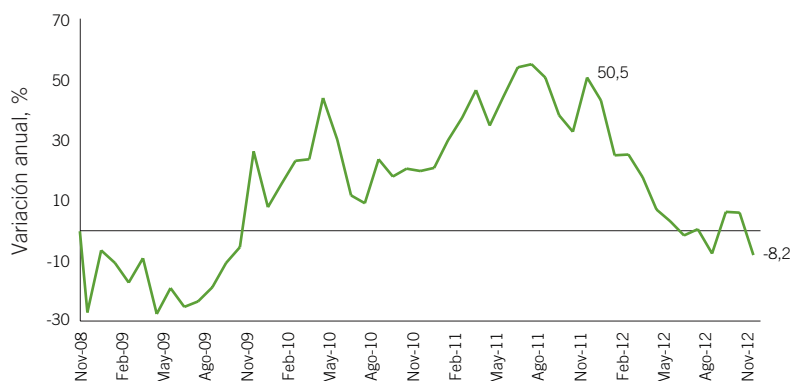
** Incluye: Aranceles e IVA externo.

Fuente: DIAN.

|| Gráfico 21. Evolución de las exportaciones

En noviembre de 2012 las exportaciones totales en Colombia (4.732 millones de dólares FOB) decrecieron 8,2% con respecto al mismo mes del año anterior.

El decrecimiento en las exportaciones en noviembre se explicó por la reducción del 13% en las ventas de combustibles y productos de las industrias extractivas.

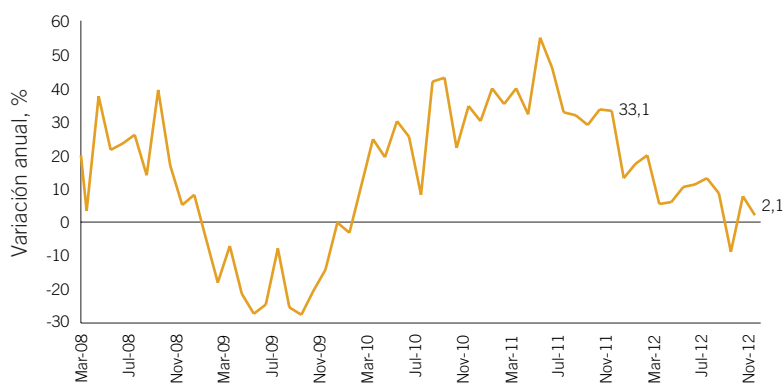


Fuente: DANE.

|| Gráfico 22. Evolución de las importaciones

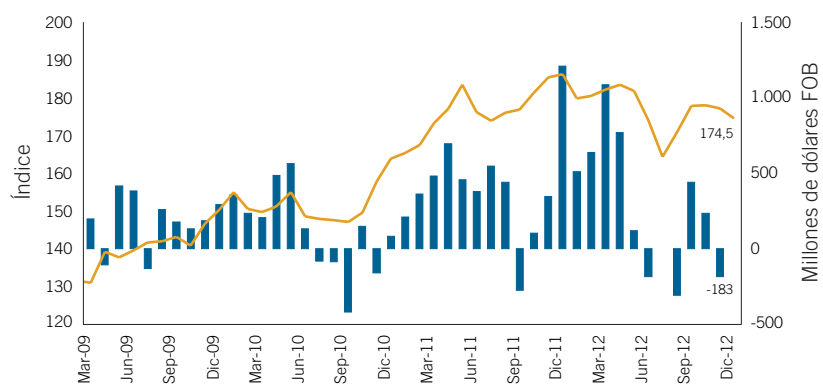
En noviembre de 2012, las importaciones aumentaron 2,1% respecto al mismo mes de 2011. El aumento estuvo impulsado por el incremento de 28,9% en las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas.

Entre enero y noviembre de 2012 las importaciones del país crecieron 7,9% con respecto al mismo periodo de 2011.



Fuente: Banco de la República y DANE.

Gráfico 23. Evolución de la balanza comercial y los términos de intercambio



Fuente: DANE y Banco de la República.

En diciembre los términos de intercambio presentaron un leve descenso en su valor, luego de tres meses en los que su nivel no se modificó.

En noviembre de 2012 la balanza comercial registró un déficit de 183 millones de dólares (FOB), 161 millones menos de lo reflejado en el mismo mes de 2011.

Gráfico 24. Comportamiento del tipo de cambio



Fuente: Banco de la República.

La tasa de cambio empezó 2013 en 1.768 pesos y finalizó enero en 1.773, registrando una ligera depreciación de 0,28%.

El tipo de cambio promedio registrado en enero fue de 1770 pesos, 82 pesos por debajo del promedio registrado en el mismo periodo del año anterior.

Gráfico 25. Tipo de cambio real entre las monedas de Colombia, Chile y Brasil*



* Base = mayo de 2007.

Fuente: Banco de la República, Banco Central de Chile y Brasil.

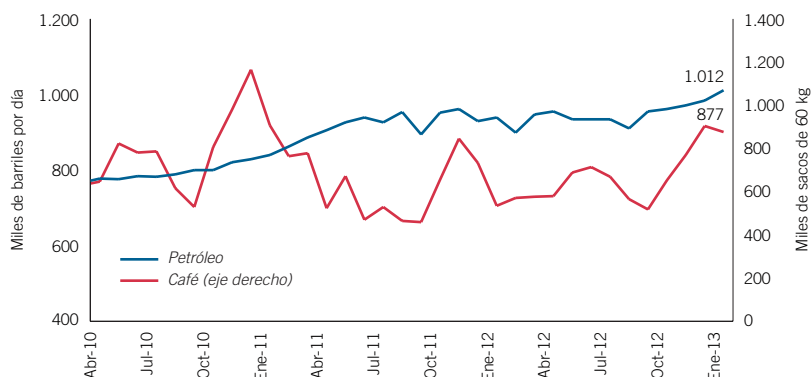
En diciembre los tipos de cambio real de las monedas de Colombia y Chile evidenciaron un ligero aumento en sus valores, contrario al comportamiento de la moneda brasileña.

En 2012 el tipo de cambio real de las monedas chilena y colombiana presentaron una apreciación de 5,1 y 2%, respectivamente; mientras el tipo de cambio real de la moneda brasilera se depreció un 14%.

II Gráfico 26. Evolución de la producción de petróleo y café

En enero se registró una producción promedio de 1.012 miles de barriles de crudo diarios, la cifra más alta que ha conseguido la industria petrolera y que representó un avance del 7,65% con respecto a enero del 2011.

La producción de sacos de café se ubicó en enero en 877 mil, 64% más que el volumen producido en enero de 2012. El incremento se debió a la evolución favorable de los programas de renovación de cafetales y las mejores condiciones climáticas.



Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos y Federación Nacional de Cafeteros.

CALENDARIO ECONÓMICO marzo 18 - abril 12 de 2013

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
18 Importaciones Balanza comercial	19 Tendencia Económica de marzo - Fedesarrollo	20 Encuesta de Opinión Financiera (EOF) BVC-Fedesarrollo Licencias de construcción	21 Producto Interno Bruto PIB	22
25	26	27 Desempleo Colombia Despacho de cemento Producto Interno Bruto PIB Eurozona	28 Producto Interno Bruto PIB Estados Unidos	29 Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) Fedesarrollo
1	2 Tasa de desempleo Eurozona	3 Informe del Mercado Laboral (IML) - Fedesarrollo	4	5 Índice de Precios al Consumidor IPC
8 Ventas de vehículos	9 Exportaciones	10 Producción industrial en Europa	11 Encuesta de Opinión al Consumidor (EOC) Fedesarrollo	12 Índice de Confianza Estados Unidos

Fuente: DANE, Bloomberg y Fedesarrollo.

Una Prospectiva Económica

de manos expertas



Incluye:

- ❑ Servicio de acompañamiento macroeconómico a suscriptores
- ❑ Tres actualizaciones al año
- ❑ Doce informes mensuales de seguimiento

Informes oficina comercial

Teléfono (571) 325 97 77 Ext.: 340 | 365 | 332

E-mail: comercial@fedesarrollo.org.co | www.fedesarrollo.org.co

Calle 78 No. 9-91 | Bogotá, Colombia